

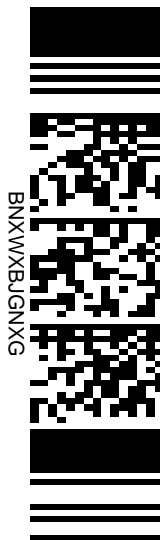
Punta Arenas, ocho de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones Luis Vidal Bendix, cédula de identidad N° 14.538.161-4, empleado público, domiciliado en calle Norte 2 N° 01180 de esta ciudad, quien interpone acción constitucional de protección en contra de Ejército de Chile, RUT N° 61.101.000-1, representado para estos efectos por el Comandante de la División de Personal, General de Brigada Javier Eduardo Iturriaga del Campo, cédula de identidad N° 9.362.159-K, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Tupper N° 1725 de Santiago o por quien corresponda, solicitando se deje sin efecto la resolución que resuelve su retiro temporal, ordenando la reincorporación a sus funciones de manera inmediata; y en caso de ser necesario, disponer la continuidad de sus remuneraciones, computadas desde el momento de la separación hasta su efectiva reincorporación al Servicio; adoptando cualquier otra medida que estime conveniente para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Explica que su grupo familiar se compone de su cónyuge, 2 hijos de 13 y 7 años, vive junto a ellos su suegro de 78 años que presenta un 55% de discapacidad. El recurrente es Suboficial de Ejército con 29 años de servicio y actualmente cumple funciones en la Brigada de Operaciones Especial "Lautaro" en la guarnición de Punta Arenas. Desde su ingreso al servicio ha permanecido en Lista 1.

El 11 de julio del año en curso, se emitió la resolución DIVPER ASJUR (R) N°1625/3093/12395 que dispone su retiro temporal del Ejército por la causal "Necesidades del Servicio" del artículo 56 letra b) de la Ley N° 18.948, por aplicación de la letra c) del artículo 251 del DFL (G) N° 1, de 1997 "Estatuto del personal de las Fuerzas Armadas", por ser su permanencia perjudicial para la imagen, prestigio y correcta marcha institucional. Sumado a ello se dispone la baja en LRC y cese de sueldo de actividad a contar del total trámite de la resolución, en virtud de lo dispuesto en los



artículos 206 y siguientes del DFL (G) N°1 de 1997. Tal decisión se le notificó el 12 de julio del actual.

Se señala en la decisión impugnada que el Comandante de la Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro" quien solicitó su retiro temporal por haberse visto involucrado en su calidad de presidente de organización comunitaria funcional "Villa Pudeto I y II", en hechos que afectarían significativamente a aproximadamente 248 miembros de la institución, los que a la fecha son investigados penalmente en virtud de querella interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, en causa RUC 2110050033-4 RIT O-3525-2021, por los delitos de falsificación de instrumento privado y uso malicioso de instrumento privado, actualmente en tramitación y donde figura el actor como presunto responsable. Agrega la resolución que en su calidad de Presidente de la citada Cooperativa Habitacional, integrada por miembros de la institución, tenía el deber de fiscalizar y tramitar de manera eficiente y adecuada los estados de pago que se generan por la empresa constructora, verificando la efectividad de realización de trabajos habitacionales conforme a carta GANTT, lo que no ocurrió generándose inconvenientes y atrasos en la entrega del conjunto habitacional para sus beneficiarios. Además se indica que estos hechos causan grave daño a la imagen institucional y generan conflictos internos que afectan el funcionamiento del servicio, por cuanto sus víctimas son cientos de funcionarios que no pudieron contar con la solución habitacional respectiva y son contrarios a los deberes constitucionales del Ejército e implican una desobediencia a los valores del "ethos" militar. Se fundamenta la decisión impugnada en que aquella no deriva de las responsabilidades y sanciones que eventualmente pudiera establecer e imponer el tribunal competente, como tampoco del resultado de las investigaciones sumarias administrativas que pudieren establecer su responsabilidad administrativa, sino que proviene de la inobservancia del haz de valores militares que envuelve la profesión.



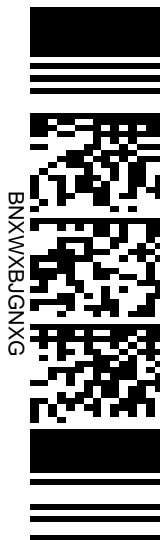
Le sorprende que la autoridad en forma intempestiva ordene su retiro temporal sin goce de sueldo, por un tiempo indeterminado, afectando con ello su integridad psíquica y la de su familia, pues les deja sin la principal fuente de ingresos.

Reconoce que a la recurrida le asiste esta potestad discrecional, para aplicarla debe contener fundamentos objetivos y razonables. Por ende, no se ajusta a dicho criterio la mera interposición de una querella pues a su respecto rige la presunción de inocencia, aun no se ha fijado audiencia de formalización y no existe ninguna causa criminal en la cual el Consejo de Defensa del Estado o el Ejército se haya querellado a nombre propio, en su contra.

Acusa que la resolución recurrida es arbitraria, en tanto carece de razonabilidad y de motivos de hecho que la fundamentan, son falsos los hechos que se relatan y por existir procesos administrativos previos, tramitados por la recurrida que desestiman sus alegaciones.

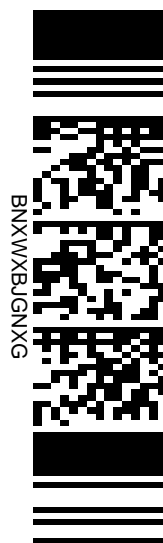
Discute que tuviese el deber de fiscalizar la efectividad de realización de trabajos habitacionales conforme a carta GANTT, patrocinada por la Jefatura para el Ahorro de la Vivienda (JAVE) unidad dependiente del Comando de Bienestar del Ejército de Chile, la que permite financiar la adquisición y construcción de viviendas para funcionarios de la institución a través de la formación de comunidades bajo el alero de la Ley N° 19.418 de Juntas de Vecinos. Dentro de estos proyectos habitacionales se encontraba el denominado "Villa Pudeto I y II", el cual fue financiado íntegramente por la JAVE a través de recursos públicos, conforme lo dispone el artículo 2 de la Ley N° 18.712, sobre Nuevo Estatuto de los Servicios de Bienestar Social de las Fuerzas Armadas.

Sostiene que la JAVE, de manera totalmente irregular, decidió que, quienes debían fiscalizar el avance de las obras, eran las propias comunidades o cooperativas habitacionales, y para estos efectos, cada comunidad debía contratar y pagar, con sus propios fondos, a un Inspector



Técnico de Obras a fin que fiscalizase el avance de las obras y validar los estados de pago, aun cuando, quien efectuaba los pagos a la constructora era directamente la JAVE. Asevera que sin sustento legal alguno, JAVE se desligó de fondos públicos que, por obligación, debía fiscalizar y pagar.

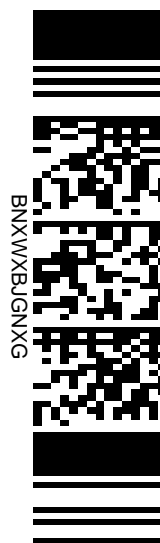
Enfatiza que en su calidad de presidente de la Cooperativa Habitacional, debió firmar estados de pago y avances de obras que, debido a sus características profesionales, no debía ni podía conocer, pues era el Inspector Técnico de Obras quien le informaba el estado de avance. Eventualmente, se generaron inconvenientes y atrasos en el proyecto, debido a problemas con la empresa constructora encargada de ejecutar las obras. Debido a las innumerables irregularidades, abandono de deberes y negligencias varias que cometió la JAVE y el Ejército en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, la Contraloría General de la República decidió auditar a la JAVE y las conclusiones de las mismas se encuentran en el Informe Final N° 614/2019, de fecha 5 de agosto del año 2021, en las cuales se constataron más de 120 observaciones a todo el proceso; una de las cuales consiste en que si bien le corresponde al inspector técnico de obra la aprobación de los estados de pago, le atañe igualmente al Servicio de acuerdo a las funciones designadas en su propio Reglamento Orgánico - RAO 02215 artículo 34 letra d) y 36 letra b)- mantener el control de todas las etapas de los proyectos y monitorear su desarrollo según lo acordado en contratos (Carta Gantt). El ente contralor cuestiona que los estados de pago no contaban con el avance respectivo, corresponde al Servicio validar que los pagos que se realicen estén debidamente acreditados. De este modo la tesis del Ejército -que el retraso en la ejecución del proyecto habitacional se debe a conductas imputables al actor, no fue avalada por Contraloría, ya que resulta injustificable que recursos públicos se hayan dejado a merced de personas que no tenían la capacidad para gestionar todas las actividades que demanda una construcción y desligar su responsabilidad.



Arguye que conforme a lo expresado la resolución es arbitraria, incluso incurre en mala fe, busca dejarle como chivo expiatorio, por cuanto existe un sumario administrativo ordenado por el propio Ejército que determinó precisamente las responsabilidades administrativas y no a su respecto, pese a lo cual se dispone su retiro temporal.

Agrega que el acto impugnado es ilegal, por cuanto infringe el principio de contradictoriedad, establecido en el artículo 10 de la Ley N° 19.880, la resolución recurrida, al fundamentarse en un acto reservado, impide ejercer el derecho a defensa y a poder controvertir los hechos que se le imputan. Igualmente se vulnera el artículo 27 de la citada ley, que establece un plazo perentorio y fatal para finalizar los procedimientos administrativos en 6 meses, cuya sanción, estima, es la caducidad de pleno derecho del procedimiento administrativo sancionador y la propia competencia del órgano para llevarlo a cabo. Considera que la potestad discrecional del Ejército en análisis debe sujetarse a ciertos límites temporales pues, de lo contrario, carecería de razonabilidad. En este caso se produjo el decaimiento del acto administrativo, toda vez que los hechos ocurrieron en 2019, han transcurrido más de 3 años y teniendo presente que la contraria sostiene que el llamado a retiro no es una sanción, y para ejercer tal facultad, está sujeto a plazo, de 6 meses o de 2 años, plazo que ha transcurrido con creces.

Los hechos denunciados infringen las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2, 3 inciso 5° y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Se ha vulnerado su derecho a la vida, integridad física y psíquica, toda vez que se le sanciona anticipadamente por hechos en los cuales no se ha determinado su responsabilidad y participación, haciendo insostenible el sustento de su grupo familiar, pues se le priva de su fuente de ingresos. Se ha afectado la igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria, en cuanto el actuar de la recurrida se funda en antecedentes que guardan relación con una investigación penal en la que no se ha formalizado la

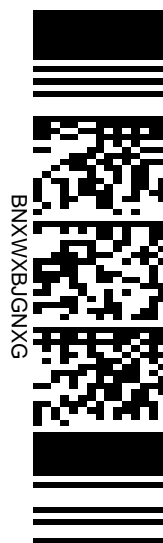


investigación, con el sólo mérito de una querella determina una sanción. Igualmente se configura la afectación de esta garantía, ya que se le ha discriminado arbitrariamente, al no tener oportunidad de acompañar antecedentes de descargo, en el marco de un proceso sumarial. Se ha conculcado la garantía de un procedimiento e investigación racional y justo y el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, al aplicársele una sanción, sin otorgar la oportunidad de defenderse y sin haber dado motivos razonables de la decisión. El llamado a retiro constituye claramente una comisión especial, sin un debido proceso. Por último se ha vulnerado el derecho a la protección de la vida privada y de la honra de la persona y su familia, por cuanto se le impide ayudar y auxiliar a mi familia, privándolos de su principal fuente de ingresos.

Informa por el recurrido Ejército de Chile, el Comandante de la División de Personal, General de Brigada Juan Solari Valdés, solicitando el rechazo del recurso deducido.

Reconoce que el Comandante de Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro" solicitó, mediante oficio de 07 de julio de 2022, el retiro temporal del recurrente por encontrarse aquel involucrado en su calidad de presidente de organización comunitaria funcional "Villa Pudeto I y II" en hechos que afectarían significativamente a aproximadamente 248 miembros de la institución, hechos investigados penalmente en virtud de querella penal interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas RIT O-3525-2021 por los delitos de falsificación de instrumento privado y uso malicioso de instrumento privado falso, en actual tramitación.

A su vez el Comandante de la División de Bienestar mediante oficios de 16 de mayo y 04 de julio, ambos de 2020, da cuenta que el recurrente en su calidad de presidente de la citada cooperativa, tenía el deber de fiscalizar y tramitar de manera eficiente y adecuada los estados de pago que se generaran por la empresa constructora, verificando la efectividad de la realización de trabajos habitacionales

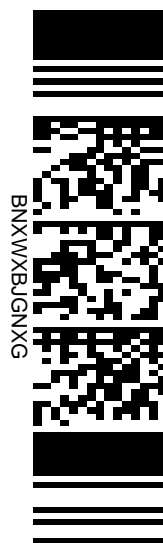


conforme a carta GANTT, lo que no ocurrió, los beneficiarios no pudieron contar con los inmuebles, lo que se ha mantenido en el tiempo, pese a cursarse los estado de pago respectivos con la validación del actor.

Controvierte las alegaciones del recurrente, estas no serían efectivas, ya que el retiro temporal dispuesto no es una sanción por infracción de deberes funcionarios, así como tampoco se persigue su responsabilidad administrativa ni penal, toda vez que la medida no está concebida como una sanción.

Explica que el informe de auditoría que se alude en el libelo tuvo por objetivo revisar la situación financiera de la JAVE y practicar un examen de cuentas sobre la inversión en proyectos de construcción, en las obras que se encuentran paralizadas y no determinar la responsabilidad administrativa del actor. Uno de los problemas detectados era que los estados de pago de proyectos constructivos no contaban con el avance respectivo, no efectuándose por los responsables las retenciones correspondientes derivadas del cumplimiento de las obras; reconoce en su libelo el actor que debió firmar estados de pago y avances de obras en conjunto con el Inspector Técnico de obras. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.418 Establece normas sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, corresponde al presidente la representación de éstas, y para los efectos del contrato y su ejecución, hará las veces de mandante y propietario de la obra, siendo responsable del control y aprobación de la totalidad de las partidas y estados de pago.

El informe de auditoría ordenó instruir investigaciones sumarias para esclarecer, entre otros, los hechos relacionados con los pagos realizados a la empresa constructora. Considerando que el recurrente participa en la visación de pagos en su calidad de presidente de la entidad comunitaria, organización de derecho privado con personalidad jurídica y patrimonio propio y no en su calidad de funcionario público, no fue partícipe en la indagatoria; sin perjuicio de ello al detectarse que existían hechos

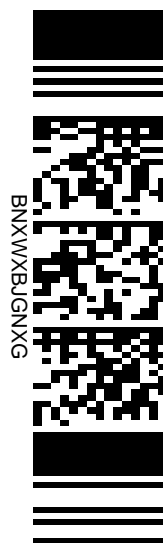


constitutivos de delito, se efectuó la denuncia respectiva ante el Ministerio Público.

Hace presente que la querella dirigida contra el actor fue presentada por 108 funcionarios que formaban parte de la organización habitacional "Villa Pudeto II". Y adicionalmente la JAVE interpuso una querella por similares delitos, además de estafa, la que se tramita contra quienes resulten responsables ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Los hechos relatados, la investigación en sede penal, causan grave daño a la imagen institucional y generan conflictos internos que afectan el funcionamiento del servicio, por cuanto las víctimas son cientos de funcionarios que no pudieron contar con la solución habitacional, antecedentes que obran en diversos medios de acceso público, como el Poder Judicial y Contraloría. Unido ello a la falta de diligencia, compromiso y control por parte del actor, como depositario de intereses comunes, se aleja del estándar exigido a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, ocasiona un perjuicio importante a cientos de familias que no pueden contar con la vivienda, pese a haber efectuado pagos a la empresa constructora con la validación del recurrente y sin cumplir los requisitos materiales para ello. Arguye que mantener entre sus filas al actor denosta y desacredita al Ejército, lo que hizo necesaria su separación de la institución, por estimarse perjudicial para el servicio y sana convivencia institucional.

Precisa que las responsabilidades de los funcionarios públicos en general y de militares en particular, no dicen relación únicamente con su comportamiento en el servicio, sino que comprende además actos que son propios de su vida privada, en cuanto comprometen el prestigio de la institución. Los actos descritos, con independencia de la responsabilidad penal que pudiese afectarle infringen el mandato constitucional que consagra a las Fuerzas Armadas y Carabineros como cuerpos armados, obedientes y no deliberantes, demuestra falta de control y compromiso con el prestigio institucional. En este sentido el Reglamento de



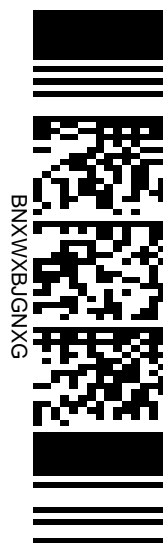
Disciplina para las Fuerzas Armadas, la Ordenanza General del Ejército y el Manual del Ethos del Ejército de Chile, contiene las normas que debe observar cada soldado en su actuar. De este modo se estimó perjudicial para la institución la permanencia del recurrente en sus filas.

La decisión reclamada se funda en los artículos 56 letra b) de la Ley N° 18.948 y 251 letra c) del DFL N° 1 de 1997, se sitúa en las especiales características de los cuerpos armados, como la disciplina, la subordinación, el deber de obediencia, el observar una conducta sobria y honorable en el desempeño de sus funciones. Aduce que la medida de retiro temporal no constituye una sanción administrativa sino que corresponde al ejercicio de una potestad discrecional. Aquella no se origina en un incumplimiento de los deberes estatutarios sino que se fundamenta en las características propias de la función militar.

El retiro temporal presenta ciertas características: corresponde al ejercicio de una potestad legal, es privativa del Comandante de la División de Personal, es discrecional.

Agrega que la aplicación de esta medida es absolutamente independiente del resultado de una investigación sumaria administrativa, no siendo obligatorio incoar una para su adopción.

Confunde el recurrente la discrecionalidad potestativa que tiene la institución para aplicar la causal de retiro temporal con el decaimiento del acto administrativo, figura que no es aplicable, por no tratarse de una sanción disciplinaria, no se trata de un procedimiento administrativo. Alega que el ente contralor ha dictaminado que el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no constituye por sí mismo una causal de invalidación ni decaimiento por excesiva demora. Tampoco existe una condena o juzgamiento anticipado por parte de la institución ni tampoco imputación de responsabilidad, sino que es propia de un régimen estatutario en la que existe una acentuada rigurosidad en torno a la selección y admisión de sus miembros.



Discute la procedencia de la acción, por cuanto el tema planteado es ajeno a la naturaleza cautelar de ésta. Desestima que la resolución impugnada sea arbitraria o ilegal, por cuanto fue adoptada en ejercicio de facultades legales expresas.

No advierte la conculcación de los derechos fundamentales del actor, por cuanto el funcionario sigue percibiendo sus remuneraciones conforme a lo preceptuado en el artículo 208 del Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas, mientras se tramita su expediente de retiro con derecho a pensión, de conformidad a lo dispuesto por la División de personal en la resolución de la División de Personal de 19 de julio del año en curso. En cuanto al debido proceso, junto con alegar que dicha garantía no se encuentra amparada por la acción deducida, arguye que no se configura una comisión especial al decidir el retiro temporal del recurrente, ya que no se trata de una sanción disciplinaria sino del ejercicio de una potestad discrecional. Desestima que se haya infringido la igualdad ante la ley o su vida privada y honra ya que no especifica concretamente como se habría amagado y porque tendría la autoridad responsabilidad en ello.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos



fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente consiste en la Resolución DIVPER ASJUR (R) N° 1625/3093/12395 de 11 de julio de 2022 del Comandante de la División de Personal del Ejército de Chile



que dispuso el retiro temporal del recurrente por la causal necesidades del servicio, la baja en LRC y cese de sueldo de actividad, lo que estima vulnera las garantías constitucionales que invoca, toda vez que se funda en hechos que no son efectivos, no se le permitió controvertir sus fundamentos ni rendir prueba.

CUARTO: Que, a su turno, la recurrida solicita el rechazo del recurso, fundado en que no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna, limitándose a ejercer una potestad discrecional conferida en la ley, ante un comportamiento que dista de los principios y características propios de la institución, no habiéndose provocado la conculcación de garantías que se alega.

QUINTO: Que ambas partes acompañaron a sus respectivas presentaciones copia de la Resolución DIVPER ASJUR (R) N° 1625/3093/12395 de 11 de julio de 2022 que dispone el retiro temporal del recurrente Luis Alex Vidal Bendix, la que se funda, como se dijo, en la causal de necesidades del servicio del artículo 56 letra b) de la Ley N° 18.948 por aplicación de la letra c) del artículo 251 del DFL N° 1 de 1977 Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.

SEXTO: Que, para resolver lo planteado, conviene tener presente lo dispuesto en los artículos 52 y 56 de la Ley de la Ley N° 18.948, "Orgánica constitucional de las Fuerzas armadas" de 1989, el primero establece "El personal deja de pertenecer a las Fuerzas Armadas por retiro o fallecimiento.

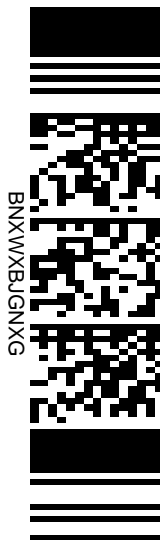
El retiro puede ser temporal o absoluto". En tanto que el último contempla: "El retiro temporal del personal del Cuadro Permanente y de Gente de Mar, procederá por alguna de las siguientes causales:

a.- Por enfermedad curable que lo imposibilite temporalmente para el servicio.

b.- Por necesidades del servicio.

c.- Por resolución del Comandante en Jefe respectivo."

A su turno el artículo 251 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1977 Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas prescribe: "El retiro temporal del personal del cuadro



permanente y de gente de mar por la causal necesidades del servicio contemplada en la letra b) del artículo 56 de la Ley N° 18.948, podrá disponerse discrecionalmente por el Director del Personal o Comandante del Comando de Personal, cuando concurra alguno de los siguientes presupuestos:

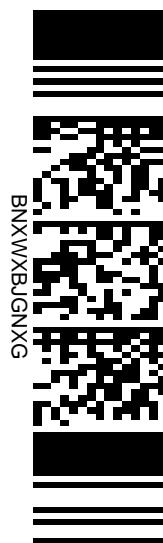
a) Por haberse comprobado la comisión de una falta grave a la disciplina en una investigación sumaria administrativa.

b) Por haber sido condenado por sentencia judicial ejecutoriada a una pena superior a un año, salvo que la autoridad competente estime que la naturaleza de los hechos que motivaron la condena no afecta su conducta profesional.

c) Por pérdida de la vocación militar o que su permanencia sea perjudicial para el servicio. Para la aplicación de la causal establecida en la letra c), el Director del Personal o Comandante del Comando de Personal deberá requerir los antecedentes u ordenar las investigaciones sumarias que le permitan verificar los hechos que le sirven de fundamento."

SEPTIMO: Que, conforme a la normativa citada y los antecedentes del proceso, fluye con claridad que el retiro temporal es una medida administrativa, de carácter discrecional, que ejerce el Comandante del Comando de Personal, en uso de facultades expresamente otorgadas por ley, cuando, entre otros, la permanencia sea perjudicial para el servicio, lo que implica la cesación de funciones de la carrera militar en forma temporal, por lo que no es homologable a una sanción por eventuales responsabilidades del ámbito administrativo, debiendo destacarse que la propia normativa dispone que la autoridad dispuesta deberá requerir los antecedentes u ordenar las investigaciones sumarias que le permitan verificar los hechos que le sirven de fundamento, ello a su elección, quien está facultado en forma privativa a disponer el llamado a retiro temporal.

En el caso concreto, la medida adoptada en el caso propuesto se enmarcó en el ejercicio de facultades discrecionales basadas en antecedentes concretos, como es la causa seguida en su contra en sede garantía en actual



investigación, donde figuran como afectados un gran número de funcionarios de la misma institución y del perjuicio a la imagen de la entidad castrense, en cuanto al estándar de comportamiento exigible, lo que tiene un reconocimiento normativo incluso a nivel constitucional, constituyendo la conducta del actor una desobediencia a principios y valores éticos, morales, personales y funcionarios, que se basan en las especiales características de la función militar.

De este modo, la decisión fue adoptada con sujeción al procedimiento establecido en el marco regulatorio respectivo, por lo tanto, no se observa trasgresión formal a los cuerpos legales respectivos, cuando, por lo demás -como lo ha reconocido la jurisprudencia administrativa y judicial- no se trata de medidas disciplinarias ni sanciones de esa índole, sino que una independiente y desvinculada de las responsabilidades perseguidas a través de la causa penal que aún se encuentra vigente; por lo que no constituye un acto ilegal.

OCTAVO: Que se descarta, igualmente, la arbitrariedad, toda vez que la decisión se sustenta en la existencia de causas penales en su contra, lo que a juicio de la encartada afecta gravemente la imagen institucional, de modo tal que razonadamente se atendió a las necesidades institucionales, cuya ponderación excede la competencia de esta Corte.

NOVENO: Que, de acuerdo a lo expresado, considerando que el acto recurrido emana de las autoridades determinadas para ello, en los casos previstos por la ley que les permiten, como consecuencia de la apreciación de antecedentes suficientes que le permitieron adoptar la decisión impugnada, permite descartar -como se dijo- la existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, razón por la cual la Corte no está en situación de adoptar medidas protectoras en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo

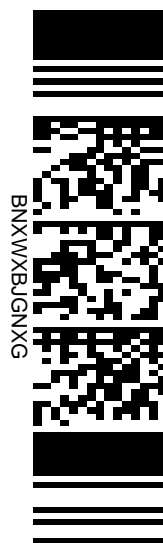


de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por Luis Vidal Bendix contra del Ejército de Chile, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N° 3696-2022. PROTECCIÓN



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas integrada por los Ministros (as) Marcos Jorge Kusanovic A., Caroline Miriam Turner G. y Ministro Suplente Claudio Marcelo Jara I. Punta Arenas, ocho de septiembre de dos mil veintidós.

En Punta Arenas, a ocho de septiembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

